

El Desafío de las Finanzas Públicas en México: Promesas y Realidad del Paquete Económico 2026

Gerardo Esquivel

1. Introducción

El análisis de la trayectoria fiscal de México durante las últimas dos décadas revela patrones persistentes de deterioro en las finanzas públicas que plantean interrogantes fundamentales sobre la sostenibilidad del modelo actual. Este trabajo examina la evolución de las finanzas públicas desde el año 2000 a la fecha, con especial énfasis en las promesas y las perspectivas de ingreso, gasto, balance y deuda pública establecidas en el Paquete Económico 2026. El argumento central plantea que, sin una reforma fiscal estructural que amplíe la base gravable y optimice el uso de recursos públicos, resultará muy complicado mantener los niveles de endeudamiento proyectados en el Paquete Económico 2026, al tiempo que se atienden las crecientes demandas sociales y se impulsa el crecimiento de largo plazo.

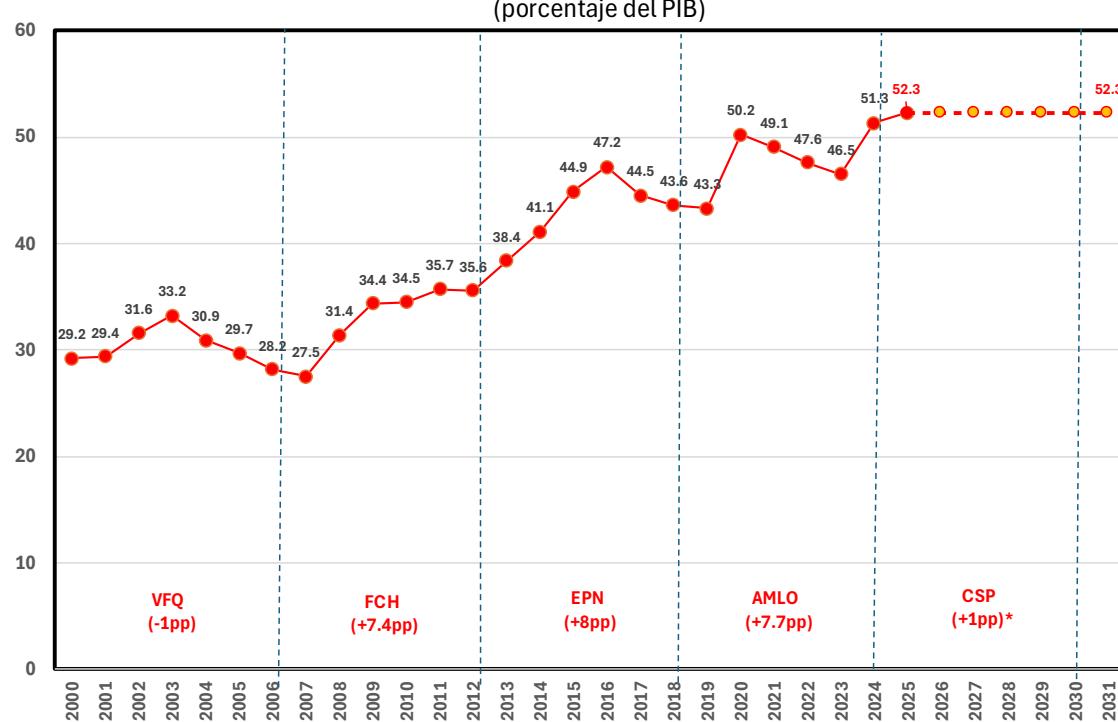
La perspectiva aquí desarrollada se alinea con los planteamientos de la Comisión Independiente para la Igualdad con Justicia Fiscal (CIJUF) respecto a la necesidad de diseñar una política fiscal más equitativa y eficiente. El análisis integra tanto la dimensión normativa, relativa a lo que debe hacerse en materia de ingresos y gastos públicos, como la dimensión positiva, concerniente a los hechos observados en años recientes y las proyecciones que fundamentan las propuestas de política fiscal para el periodo venidero.

2. La evolución de las finanzas públicas y las promesas del Paquete Económico 2026

El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público constituye un indicador comprensivo del endeudamiento gubernamental que, si bien presenta diferencias conceptuales respecto al concepto más utilizado de deuda pública, permite capturar con mayor precisión las necesidades de financiamiento del Estado mexicano. La trayectoria de este indicador entre 2000 y 2024 muestra con claridad dos fases distintas de la gestión de la deuda pública en México (ver Gráfica 1).

Durante la gestión del presidente Vicente Fox (2000-2006), el saldo de los requerimientos financieros del sector público experimentó una reducción marginal, reflejando un manejo fiscal relativamente conservador. Este comportamiento contrasta con lo observado en las tres administraciones subsecuentes. Tanto la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) como las de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) registraron incrementos en el saldo histórico de los requerimientos financieros del orden de 7 a 8 puntos porcentuales del PIB cada una, lo que equivale a un aumento de más de un punto porcentual del PIB por cada año de gestión. Esta acumulación de endeudamiento sostenida situó al indicador en 51.3% del PIB al cierre de la administración de López Obrador. Esta tendencia alcista se mantuvo durante el primer año de la administración de Claudia Sheinbaum, ya que se prevé que este indicador aumente a 52.3% al cierre de 2025. La gran promesa del Paquete Económico 2026 consiste precisamente en mantener constante este nivel de endeudamiento durante el resto de la administración de la Presidenta Sheinbaum (Gráfica 1).

Gráfica 1. Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), 2000-2031



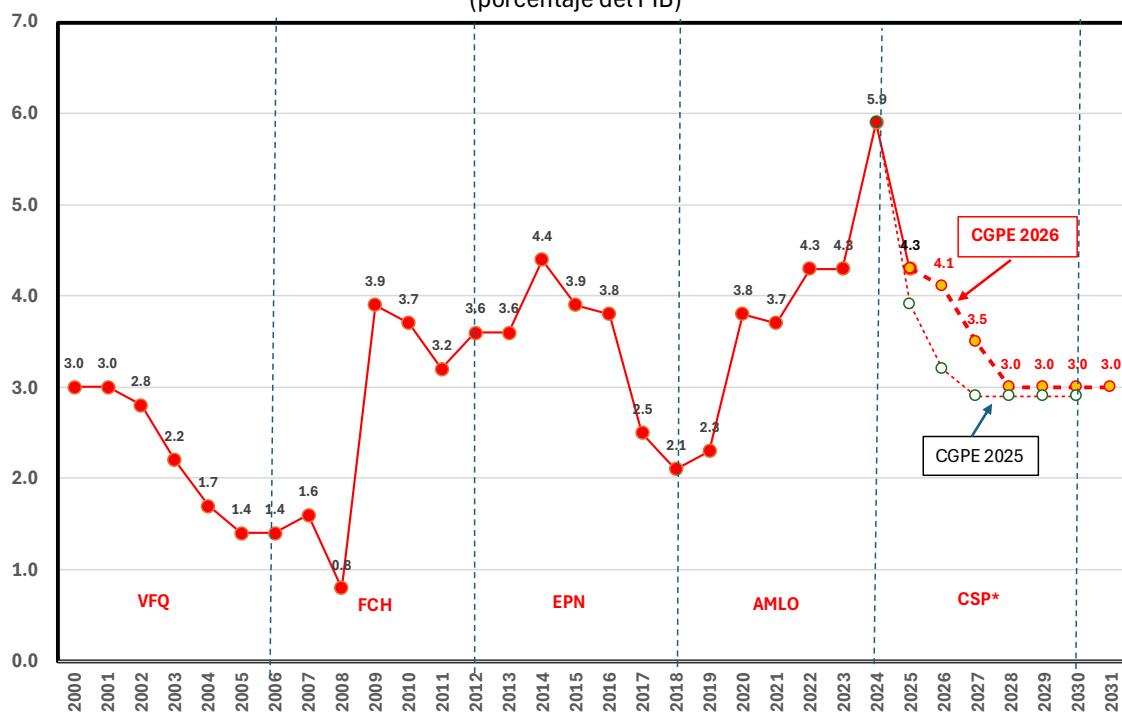
Fuente: Elaboración propia con datos observados de la SHCP (2000–2024) y proyecciones del PPEF 2026 (2025–2031).

La factibilidad de sostener este nivel de endeudamiento depende crucialmente de la evolución del flujo anual de requerimientos financieros, lo que tradicionalmente se conoce como el déficit fiscal. La evolución de estos flujos revela la magnitud del desafío al que se enfrenta México. Durante la administración de Vicente Fox, los requerimientos financieros anuales se mantuvieron en niveles relativamente bajos, lo que explica la reducción del saldo acumulado. Sin embargo, a partir de 2008, en el contexto de la crisis financiera global y durante la presidencia de Calderón, los requerimientos financieros experimentaron un salto abrupto, alcanzando niveles cercanos a 4% del PIB anual. Esta trayectoria de déficits elevados persistió durante el resto de la administración Calderón y los primeros años del gobierno de Peña Nieto (ver Gráfica 2).

Hacia el final de su mandato, la administración Peña Nieto emprendió un esfuerzo de consolidación fiscal, procurando reducir el déficit. Esta decisión se materializó, entre otras medidas, a través del ajuste de precios de los combustibles conocido como el "gasolinazo" de enero de 2017, episodio con consecuencias económicas y políticas ampliamente documentadas. A pesar de estos esfuerzos, el ajuste resultó insuficiente para revertir la tendencia acumulada de endeudamiento.

La administración de López Obrador inició con la promesa explícita de mantener un déficit fiscal reducido, propósito que se materializó durante el primer año de su gestión. No obstante, en 2020, la combinación de los efectos económicos derivados de la pandemia de COVID-19 y otros factores estructurales provocó que los requerimientos financieros retornaran a niveles cercanos a 4% del PIB. Más significativo aún, durante el último año de esta administración (2024), el déficit fiscal se expandió hasta alcanzar aproximadamente el 6% del PIB, cifra que representa el nivel más elevado de las últimas tres décadas. Este incremento extraordinario del gasto público resultó en un deterioro fiscal sin precedentes.

Gráfica 2. Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), 2000-2031
 (porcentaje del PIB)

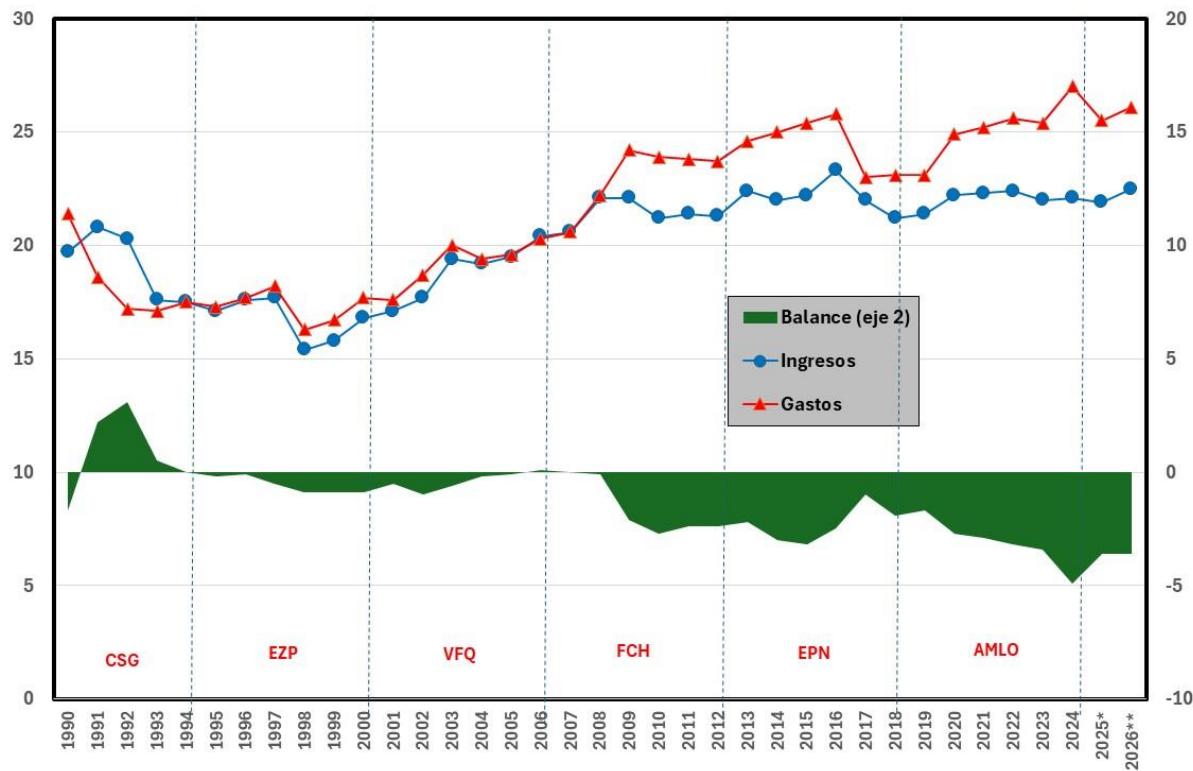


Fuente: Elaboración propia con datos observados de la SHCP (2000–2024) y proyecciones del PPEF 2026 (2025–2031).

Ante este complejo escenario heredado, la administración Sheinbaum, a través del Paquete Económico 2026, propone una trayectoria de consolidación fiscal significativamente menos drástica que la originalmente contemplada en los Criterios Generales de Política Económica del año previo (Gráfica 2). Mientras que las proyecciones anteriores anticipaban una reducción muy acelerada del déficit, el plan actual contempla una trayectoria más gradual, posponiendo el objetivo de reducir el déficit al 3% del PIB por varios años. Esta decisión, aunque representa un abandono parcial de la meta de consolidación, resulta prudente desde una perspectiva macroeconómica, ya que un ajuste de la magnitud originalmente prevista habría generado elevados riesgos de provocar una contracción económica significativa.

Gráfica 3. Ingresos, Gastos y Balance Presupuestario, 1990-2026

(porcentaje del PIB)

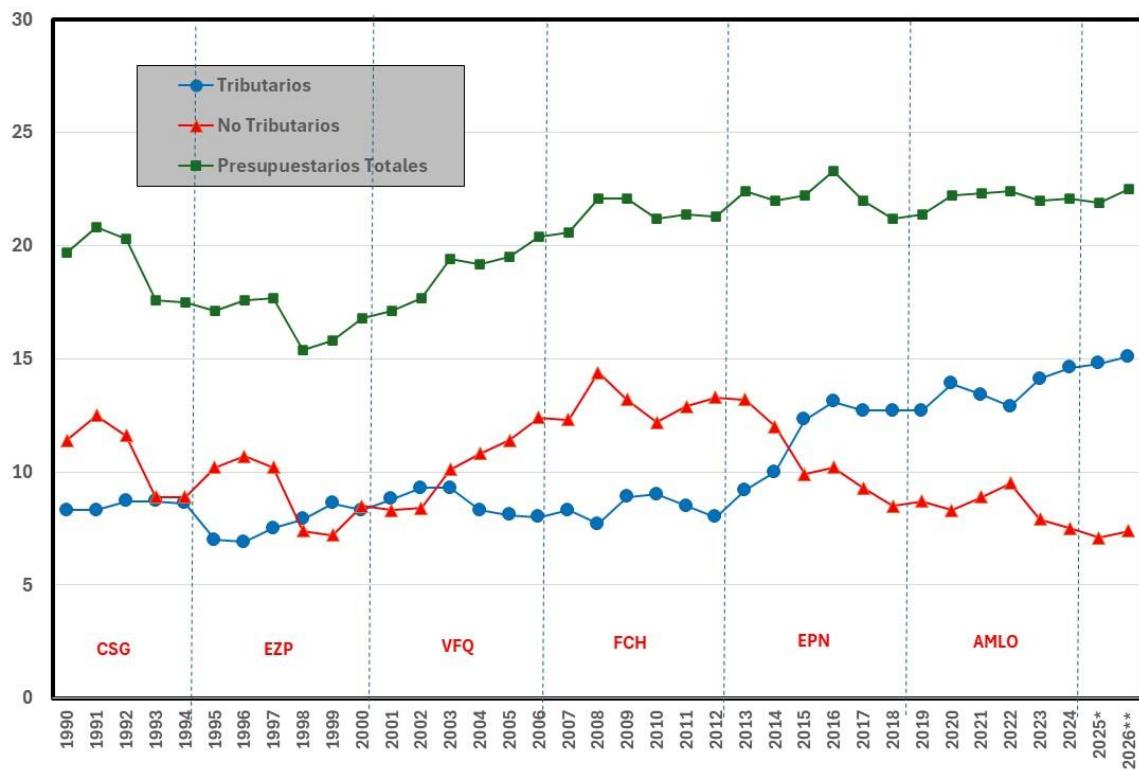


Fuente: Elaboración propia con datos observados de la SHCP (2000–2024) y proyecciones del PPEF 2026 (2025–2026).

La pregunta fundamental radica en determinar si posponer la consolidación fiscal resulta sostenible. Para responder a esta interrogante resulta indispensable examinar la evolución proyectada tanto de los ingresos como de los gastos del sector público. Desde la perspectiva del balance fiscal, lo relevante son los ingresos presupuestarios totales, no exclusivamente los tributarios. La evidencia histórica muestra que los ingresos presupuestarios se han mantenido estancados en niveles cercanos a 21% del PIB durante las tres administraciones más recientes, mientras que el gasto público ha seguido una trayectoria ascendente, alcanzando 26.1% del PIB en la proyección para 2026 (ver Gráfica 3). Esta divergencia estructural entre ingresos y gastos explica el deterioro persistente del balance fiscal y fundamenta el escepticismo respecto a la viabilidad de las proyecciones contenidas en el Paquete Económico 2026.

El análisis desagregado de los ingresos públicos revela una dinámica preocupante. Si bien los ingresos tributarios han experimentado un crecimiento gradual durante el periodo analizado, este incremento ha servido únicamente para compensar la contracción de los ingresos no tributarios, particularmente los de origen petrolero (ver Gráfica 4). Se debe recordar que la producción de petróleo se encuentra actualmente en niveles comparables a los registrados al inicio del auge petrolero mexicano, hace aproximadamente cinco décadas. Adicionalmente, la proporción de crudo destinada a exportación ha disminuido considerablemente, dado que una mayor fracción de la producción se procesa en refinerías nacionales. Esta reconfiguración del sector petrolero explica en gran medida el estancamiento de los ingresos presupuestarios totales, a pesar del crecimiento de la recaudación tributaria.

Gráfica 4. Ingresos Tributarios, No Tributarios y Totales, 1990-2026
(porcentaje del PIB)



Fuente: Elaboración propia con datos observados de la SHCP (2000–2024) y proyecciones del PPEF 2026 (2025–2026).

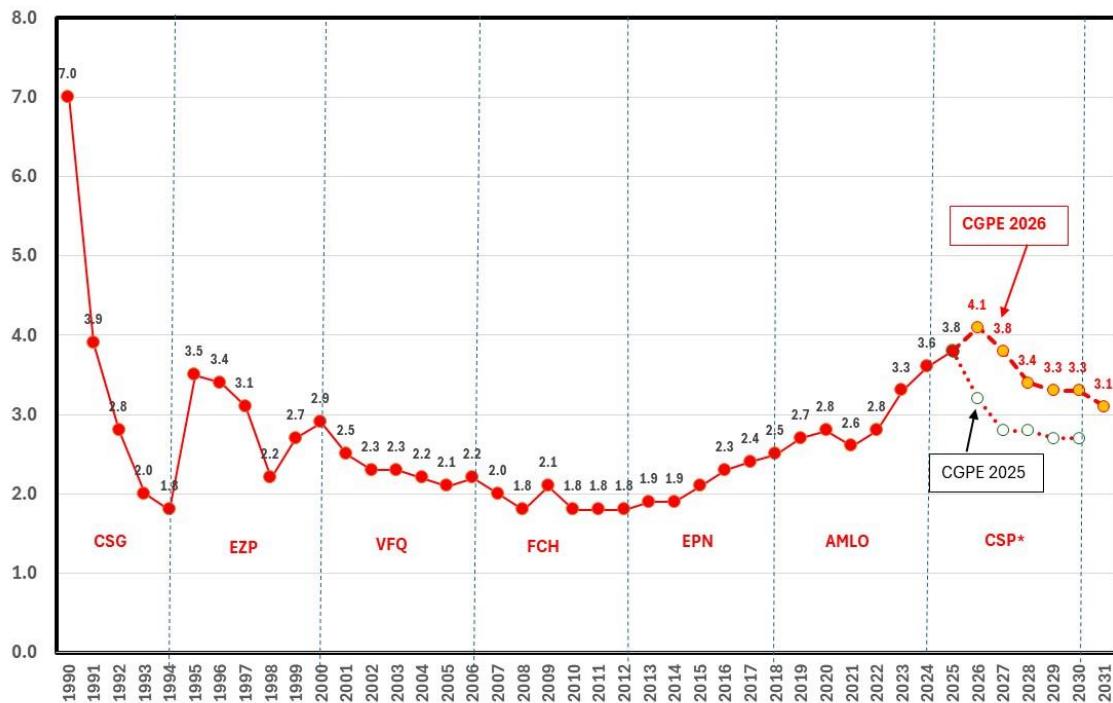
3. Insostenibilidad de las proyecciones de gasto público

El Paquete Económico 2026 postula que el gasto público no solamente se contendrá, sino que incluso se reducirá como proporción del PIB durante los años venideros. Esta proyección resulta difícilmente creíble cuando se consideran las múltiples fuentes de rigidez e inercia presentes en la estructura del gasto público mexicano. La inclusión en la Constitución de diversos programas sociales durante la administración de López Obrador ha generado compromisos de gasto legalmente blindados que no podrán ajustarse sin el apoyo de una mayoría calificada para realizar modificaciones constitucionales. Simultáneamente, el cambio demográfico y epidemiológico que experimenta el país genera presiones ascendentes sobre el gasto en salud, pensiones y otros rubros asociados al envejecimiento poblacional. Mientras que los supuestos relativos a los ingresos contenidos en el Paquete Económico 2026 parecen razonables (ya que no contemplan una reforma fiscal importante), los supuestos sobre la evolución del gasto público resultan marcadamente optimistas y probablemente insostenibles. Esta asimetría entre proyecciones realistas de ingresos y proyecciones optimistas de gastos constituye una fragilidad fundamental del plan de contención del endeudamiento público propuesto.

Un componente específico del gasto público que se proyecta disminuir es el costo financiero del servicio de la deuda (ver Gráfica 5). Este rubro ha experimentado un crecimiento significativo durante los años recientes, producto tanto de la acumulación de deuda pública como de los elevados niveles de tasas de interés prevalecientes. Las proyecciones de consolidación fiscal descansan en una expectativa de reducción del costo financiero, hipótesis que resulta parcialmente plausible por el lado de las tasas de interés, dado el inicio de un ciclo de política monetaria menos restrictiva, pero cuestionable por el lado del saldo de la deuda acumulada, la cual continuará incrementándose en términos absolutos.

Gráfica 5. Costo Financiero, 1990-2031

(porcentaje del PIB)

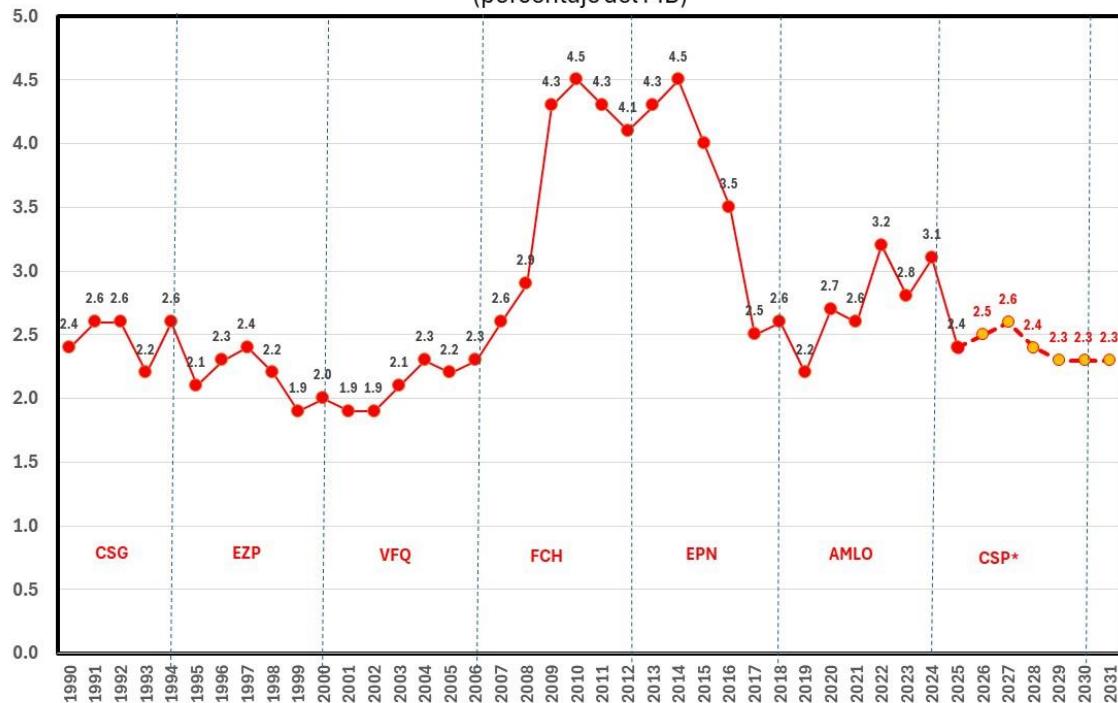


Fuente: Elaboración propia con datos observados de la SHCP (1990–2024) y proyecciones del PPEF 2026 (2025–2031).

4. Inversión pública, crecimiento económico y productividad

El ajuste más importante contemplado en las proyecciones fiscales recae sobre la inversión física del sector público. De entrada, hay que considerar que México se encuentra entre los países con menores niveles de inversión pública en perspectiva comparada internacional, con valores que oscilan entre 2% y 3% del PIB. Únicamente durante los últimos años de la administración de Calderón y los primeros de Peña Nieto la inversión pública alcanzó niveles superiores, circunstancia facilitada por un entorno petrolero excepcionalmente favorable en términos de producción y precios (ver Gráfica 6). Con los sucesivos esfuerzos de consolidación fiscal, la inversión pública ha quedado relegada a niveles precarios, situación que explica en parte por qué esta no ha logrado generar efectos multiplicadores significativos capaces de catalizar mayores flujos de inversión privada.

**Gráfica 6. Gasto de Capital: Inversión Física Pública
1990-2031**
(porcentaje del PIB)

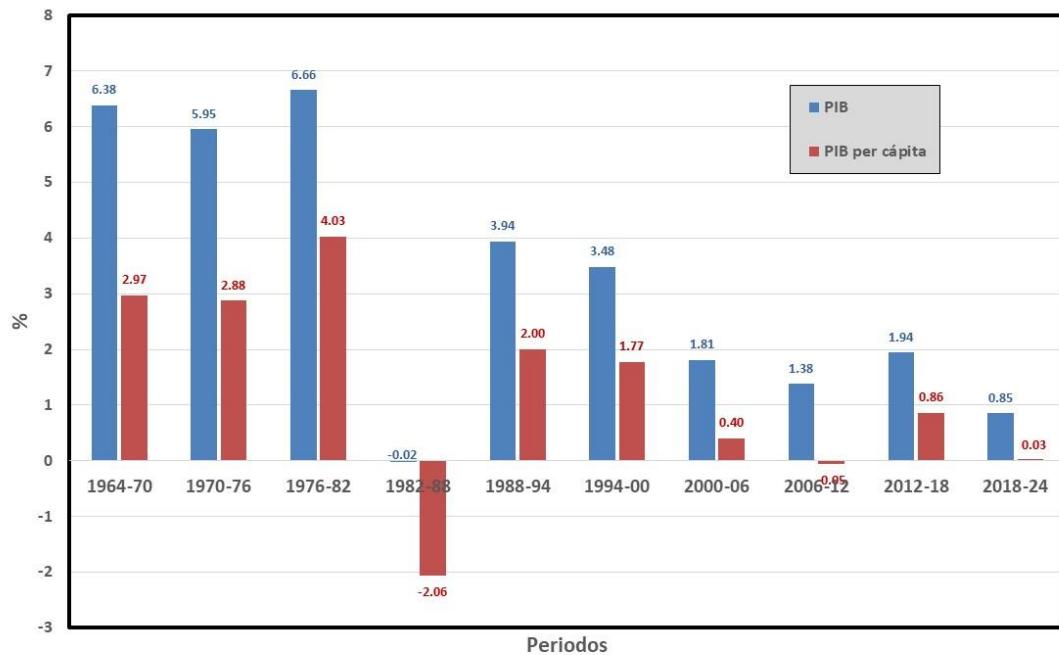


Fuente: Elaboración propia con datos observados de la SHCP (1990–2024) y proyecciones del PPEF 2026 (2025–2031).

La trayectoria de la inversión pública presenta implicaciones directas sobre el desempeño de largo plazo de la economía mexicana. La evidencia histórica muestra una tendencia descendente en las tasas de crecimiento del PIB real, desde los niveles relativamente elevados observados en décadas pasadas hacia tasas progresivamente menores en años recientes (ver Gráfica 7). De hecho, la administración de López Obrador registró la tasa de crecimiento promedio más baja del PIB total desde el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988). Más preocupante aún, el crecimiento del PIB per cápita durante el periodo 2018-2024 fue prácticamente nulo. Así, de cumplirse las expectativas de los analistas sobre la evolución del PIB para 2025 y 2026 (crecimiento de 0.5% y 1.4%, respectivamente) se habrían acumulado ya ocho años de estancamiento en términos de ingreso per cápita entre 2018 y 2026, situación que refleja los problemas del modelo de crecimiento de los gobiernos del nuevo régimen en México.

Esta dinámica de bajo crecimiento se encuentra estrechamente vinculada con la insuficiencia de inversión pública en infraestructura y capital físico. La teoría económica y la evidencia empírica internacional documentan ampliamente los efectos positivos de la inversión pública de calidad sobre la productividad total de los factores y el crecimiento de largo plazo. La inversión en infraestructura de transporte, comunicaciones, energía y otros servicios públicos reduce costos de producción, facilita la integración de mercados y genera externalidades positivas que benefician al sector privado. En ausencia de estos flujos de inversión pública, la economía enfrenta restricciones estructurales a su capacidad de crecimiento que no pueden compensarse únicamente mediante ajustes de política monetaria o reformas microeconómicas. Por ello, es poco probable que, en la medida en la que no ocurra una reforma fiscal amplia y progresiva, el Estado mexicano pueda realizar las inversiones que requiere el país.

**Gráfica 7. Tasa de crecimiento promedio anual del PIB total
y del PIB per cápita por sexenios
(porcentaje)**



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. *World Development Indicators*.

5. Desafíos estructurales y la ausencia de reforma fiscal

Los elementos analizados convergen hacia una conclusión ineludible: resulta difícil sostener el nivel proyectado de deuda pública sin emprender una reforma fiscal de carácter estructural. En el corto plazo, la trayectoria fiscal puede mantenerse mediante la contención del gasto público en niveles que comprometen la provisión adecuada de bienes y servicios públicos esenciales. Sin embargo, esta estrategia no constituye una solución sostenible de largo plazo. La experiencia histórica demuestra que, en ausencia de una crisis que genere una amplia presión política o económica, los incentivos para emprender reformas estructurales profundas pueden ser insuficientes.

Una reforma fiscal requeriría múltiples componentes. Primero, la ampliación sustancial de la base gravable, incorporando sectores y actividades que actualmente enfrentan tratamientos preferenciales o se encuentran en la informalidad. Segundo, la mejora en la eficiencia del gasto público, asegurando que los recursos se asignen a programas y proyectos con mayor impacto social y económico. Tercero, el fortalecimiento de las capacidades administrativas de recaudación, reduciendo la evasión y la elusión fiscales. Cuarto, la revisión de la estructura tributaria para garantizar mayor progresividad y equidad en la distribución de la carga fiscal.

El enfoque actual de política fiscal se caracteriza por ajustes marginales e incrementales: la introducción de impuestos específicos a productos como bebidas azucaradas o videojuegos violentos, la eliminación gradual de regímenes especiales, o modificaciones menores en tasas impositivas. Si bien estas medidas pueden generar recursos adicionales en el margen, resultan insuficientes para resolver los problemas estructurales de fondo. Estos problemas incluyen las enormes demandas sociales insatisfechas en salud, educación y protección social, las necesidades de inversión en infraestructura pública para elevar la productividad y competitividad de la economía, y la necesidad de garantizar un crecimiento económico sostenido que permita elevar el nivel de vida de la población.

Conclusiones

El análisis de la trayectoria fiscal de México durante las últimas dos décadas y las proyecciones hacia 2031 revela la existencia de desequilibrios estructurales significativos que comprometen la sostenibilidad de las finanzas públicas. El saldo de requerimientos financieros del sector público ha aumentado de manera sostenida hasta alcanzar 52.3% del PIB, nivel que el Paquete Económico 2026 proyecta mantener estable. Sin embargo, la divergencia persistente entre ingresos estancados cerca de 21% del PIB y gastos crecientes que alcanzan ya el 26.1% del PIB genera dudas razonables sobre la viabilidad de estas proyecciones.

La rigidez del gasto público, derivada de la constitucionalización de programas sociales y de las presiones demográficas y epidemiológicas, limita severamente los márgenes de ajuste fiscal. Simultáneamente, el estancamiento de los ingresos petroleros y la ausencia de una reforma tributaria estructural restringen las posibilidades de expansión de los recursos públicos. La inversión pública, comprimida a niveles históricamente bajos, resulta insuficiente para impulsar el crecimiento económico y ha contribuido al estancamiento del PIB per cápita observado desde 2018.

La experiencia histórica sugiere que, sin una *crisis* que obligue a la acción, la probabilidad de emprender reformas estructurales profundas permanece reducida. No obstante, la postergación indefinida de estas reformas incrementa los riesgos de enfrentar eventualmente un ajuste más traumático. Una reforma fiscal integral constituye el único camino viable para resolver los desequilibrios fiscales estructurales, atender las demandas sociales insatisfechas y generar los recursos necesarios para financiar la inversión pública que requiere el desarrollo económico de largo plazo. La ausencia de decisión política para emprender esta agenda de reformas representa el principal obstáculo para la construcción de un sistema fiscal más justo, eficiente y capaz de promover el crecimiento económico sostenible que México necesita.